



# Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general  
21 de junio de 2024  
Español  
Original: francés

## Comité contra la Tortura

### Decisión adoptada por el Comité en virtud del artículo 22 de la Convención, respecto de la comunicación núm. 575/2013\* \*\*

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <i>Comunicación presentada por:</i>   | Saidi Ntahiraja (representado por Philip Grant, de la asociación Track Impunity Always (TRIAL International))  |
| <i>Presunta víctima:</i>              | El autor de la queja   |
| <i>Estado parte:</i>                  | Burundi  |
| <i>Fecha de la queja:</i>             | 10 de diciembre de 2013 (presentación inicial)   |
| <i>Fecha de la presente decisión:</i> | 3 de agosto de 2015  |
| <i>Asunto:</i>                        | Tortura durante la detención con el fin de obtener una confesión   |
| <i>Cuestión de procedimiento:</i>     | No agotamiento de los recursos internos  |
| <i>Cuestiones de fondo:</i>           | Tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; obligación de vigilar sistemáticamente las prácticas de interrogatorio; obligación de iniciar una investigación rápida e imparcial; derecho a un recurso efectivo; derecho a una reparación; prohibición de utilizar las confesiones obtenidas bajo tortura |
| <i>Artículos de la Convención:</i>    | 1; 2, párrafo 1; 11 a 14 y, subsidiariamente, el artículo 16   |

1.1 El autor de la queja de fecha 10 de diciembre de 2013 es Saidi Ntahiraja, nacido en Burundi en 1975. Sostiene que ese país ha violado sus derechos según lo dispuesto en los artículos 2, párrafo 1, y 11 a 14, leídos conjuntamente con el artículo 1 y, subsidiariamente, con el artículo 16 de la Convención. El autor de la queja está representado por Philip Grant, de la asociación suiza contra la impunidad Track Impunity Always (TRIAL).

1.2 El 17 de diciembre de 2013, en aplicación del párrafo 1 del artículo 114 de su reglamento, el Comité recordó al Estado parte que las disposiciones legales internas no pueden menoscabar el derecho de presentar quejas y que, por consiguiente, el Estado parte debe prevenir con eficacia toda amenaza o todo acto de violencia a que pudiera estar expuesto el autor de la queja o su familia, en particular, por haber presentado la presente queja. El

\* Decisión adoptada por el Comité en su 55º período de sesiones (27 de julio a 14 de agosto de 2015).

\*\* Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Essadia Belmir, Alessio Bruni, Satyabhoosun Gupt Domah, Felice Gaer, Abdoulaye Gaye, Claudio Grossman, Jens Modvig, Sapana Pradhan-Malla, George Tugushi y Kening Zhang.



Comité pidió al Estado parte que lo informase de las medidas adoptadas para conseguir ese objetivo.

### **Recordatorio de los hechos expuestos por el autor**

2.1 Hasta que sucedieron los hechos relatados en la comunicación, el autor ejercía la profesión de militar en la base de la policía militar de Ngagara, en Bujumbura, y ostentaba el grado de capitán. Está casado y tiene dos hijos.

2.2 Según el autor, su detención se enmarca en un contexto general de violaciones de los derechos humanos en Burundi, en el que no se ha manifestado ninguna voluntad real de promover la justicia y poner fin a la impunidad. El 29 de enero de 2010, el autor acudió, como solía hacer, a una de las playas de Bujumbura para reunirse con unos amigos. De repente, él y sus amigos empezaron a oír gritos y disparos. Aparecieron más de 50 hombres armados que dispararon hacia ellos y gritaron que no se movieran y se echaran al suelo. El autor reconoció entre los hombres a agentes del Servicio Nacional de Inteligencia, así como al jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional de Burundi. Unos minutos después, se acercó otro grupo de unos 60 hombres, vestidos con uniformes militares, ataviados con boinas rojas y pertrechados con metralletas, *kalashnikov* y lanzacohetes que disparaban en todas direcciones. Estos agentes pidieron a todos los militares presentes en la playa que se echaran al suelo, y así lo hicieron. El autor fue inmovilizado por agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y el Comandante de la Primera Región Militar y sus siete guardaespaldas, y fue acusado de promover un golpe de estado.

2.3 Cuando estaba completamente inmovilizado, boca abajo y con los brazos atados a la espalda, el autor fue golpeado por tres agentes del Estado, por orden del Comandante. Le propinaron patadas en la cabeza y golpes con las culatas de los fusiles en la espalda y las piernas. Desde que le inmovilizaron hasta que dejaron de golpearle transcurrieron unos 30 minutos. Luego le subieron a un camión militar con los demás militares detenidos. Llegaron a la Primera Región Militar situada en las inmediaciones de la Base de Defensa Antiaérea hacia las 20.45 horas.

2.4 Unos minutos antes de subir a los militares al camión, llegó al lugar de los hechos una periodista de la Radio Pública Africana después de haber sido informada de lo que estaba sucediendo en la playa. Su testimonio confirma las afirmaciones del autor de la queja, en particular, que él mismo y los demás militares fueron golpeados y maltratados antes de ser trasladados<sup>1</sup>.

2.5 Cuando llegaron a la Primera Región Militar, el Ministro de Defensa, que estaba allí presente, ordenó que se esposara y trasladara a los militares detenidos a una primera sala donde permanecieron durante aproximadamente una hora sin ninguna asistencia. Luego, el autor fue trasladado a una sala donde se encontraban tres oficiales de la policía judicial, que realizaron un primer interrogatorio. Después el autor fue sometido a otro interrogatorio, esta vez en el despacho del Comandante de la Primera Región Militar, en presencia del Director de la Policía Nacional. Al negar todas las acusaciones, el Director de la Policía le golpeó en la espalda violentamente con una silla. El autor fue obligado a desnudarse y arrodillarse sobre chapas de botellas de cerveza y permaneció en esa dolorosa posición durante todo el interrogatorio, es decir, durante más de tres horas, al tiempo que recibía golpes por todo el cuerpo. Le propinaron correazos en la cabeza y en las piernas. Durante todo el transcurso de este violento interrogatorio, permaneció con los brazos esposados a la espalda. Además, fue víctima de un simulacro de ejecución. De hecho, el Director de la Policía Nacional le apuntó con una pistola en la cara y, al tiempo que la cargaba, le pidió que admitiese todas las acusaciones que se le imputaban y confesara los hechos.

2.6 A continuación, el Director de la Policía Nacional le golpeó con violencia con la culata de la pistola en la cabeza. Sangraba de tal modo que los agentes le colocaron el jersey alrededor de la cabeza para detener la hemorragia. También le hicieron una incisión en el brazo izquierdo con el cuchillo de un *kalashnikov*. La cicatriz es claramente visible aún en la actualidad<sup>2</sup>. Otro de los detenidos, que fue arrestado al mismo tiempo que el autor y en las

---

<sup>1</sup> Este testimonio se adjunta a la comunicación.

<sup>2</sup> Las fotos que muestran las cicatrices se adjuntan a la comunicación inicial.

mismas circunstancias, fue llevado a su misma sala sobre las 2.00 horas de la madrugada y asegura que el autor tenía señales visibles de tortura<sup>3</sup>. Al ver la suerte del autor, el otro detenido lo denunció en ese momento como el promotor del golpe de estado a fin de librarse de correr el mismo destino. Entonces siguieron torturando al autor, lo que le llevó a acceder a firmar un atestado en el que reconocía su implicación en la preparación de dicho golpe de estado.

2.7 Hacia las 4.00 horas de la madrugada, el auditor militar<sup>4</sup>, el Coronel N., tras ser informado de los actos de violencia infligidos al autor durante el interrogatorio, pidió ver al Director de la Policía Nacional y exigió que se destruyese el atestado firmado por el autor. A raíz de lo ocurrido, este auditor militar tuvo que abandonar el país tras recibir amenazas contra su vida.

2.8 Al día siguiente por la noche (el día posterior a su detención), se procedió al registro del domicilio del autor, sin que a su esposa le fuese presentada orden judicial alguna. El registro se desarrolló con actos de violencia contra su mujer y sus hijos.

2.9 El 1 y 2 de febrero de 2010, tras varias peticiones infructuosas, los representantes de diversas asociaciones como la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y de las Personas Detenidas, Human Rights Watch y la Liga Iteka pudieron finalmente entrevistarse con el autor. Esas asociaciones se informaron de las circunstancias de la detención y las torturas sufridas y observaron las señales de las heridas ocasionadas, y lo denunciaron públicamente en los medios de comunicación<sup>5</sup>.

2.10 Entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 2010, el autor estuvo detenido durante el día en la base militar de Kamenge y durante la noche en las instalaciones del Servicio Nacional de Inteligencia. Se le mantuvo esposado durante toda la detención. El 2 de febrero de 2010, recibió la visita de los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)<sup>6</sup>. Durante su detención en el Servicio Nacional de Inteligencia, fue objeto de otros tres interrogatorios en los que los agentes le sometieron a una intensa presión amenazándole de muerte. Por la noche, le obligaban a desnudarse y dormía con los brazos y las rodillas esposadas sobre un suelo de cemento muy frío. Toda visita le estaba prohibida.

2.11 El 5 de febrero de 2010, el autor fue trasladado a la cárcel de Muramvya. Hasta ese momento no le quitaron las esposas y el auditor militar le sometió a un nuevo interrogatorio sobre los hechos en el que negó su responsabilidad en la preparación del presunto golpe de estado y firmó un atestado en ese sentido.

2.12 En la cárcel de Muramvya, fue recluso con otras 30 personas en una celda de 25 m<sup>2</sup> que, al estar cerca de la cocina, estaba llena de humo. El autor desarrolló problemas de salud como la hinchazón crónica de los miembros inferiores. No se le proporcionó ninguna atención médica. El autor permaneció encarcelado en ese centro penitenciario durante 39 días en unas condiciones de gran precariedad. Recibió dos visitas de delegados del CICR.

2.13 El 2 de marzo de 2010, el autor compareció a puerta cerrada ante el Tribunal de Primera Instancia de Muramvya. No contó con asistencia letrada. Durante la vista, denunció las torturas que había sufrido y solicitó ver a un médico, lo que le fue denegado. Nunca se le notificó la resolución del juez sobre la confirmación de su detención, pero permaneció privado de libertad.

2.14 El 16 de marzo de 2010, el autor fue trasladado a la cárcel central de Mpimba en Bujumbura, donde permaneció detenido durante dos años y nueve meses en unas condiciones de reclusión igual de deplorables, dado que el hacinamiento de la cárcel no hacía más que agravar unas condiciones sanitarias ya precarias. La celda que compartía con otro detenido medía unos 4 m<sup>2</sup> y solo disponía de una pequeña ventana enrejada. La ración alimentaria diaria era de 250 gramos de judías y harina de mandioca. El autor recibió ocho visitas de delegados del CICR.

<sup>3</sup> El testimonio de la otra persona detenida se adjunta a la comunicación inicial.

<sup>4</sup> Se trata del juez de instrucción militar que el autor denomina auditor militar.

<sup>5</sup> El artículo en el medio local que contiene tales denuncias se adjunta a la comunicación.

<sup>6</sup> Todas las visitas que el CICR realizó al autor están documentadas y las declaraciones se adjuntan a la comunicación.

2.15 El autor fue enjuiciado por tribunales militares. Los cargos que se le imputaban cambiaron a lo largo del proceso, pasando de atentado contra la seguridad de la autoridad de mando durante la fase anterior al juicio a complot militar ante el juez de sentencia. Además, durante el proceso, se alzaron varias voces que afirmaban que los militares no preparaban un golpe de estado, sino que habían comenzado a formular reivindicaciones sobre sus condiciones laborales, fundamentalmente sobre su remuneración. Según esa tesis, los militares detenidos habían sido objeto de una maniobra destinada a apartar a los opositores políticos ante la llegada de las elecciones de 2010<sup>7</sup>. Por otro lado, de la correspondencia enviada por el Ministro de Defensa Nacional y Veteranos de Guerra a diversos responsables militares a finales de 2009 sería legítimo deducir que el objetivo de la detención era silenciar determinadas reivindicaciones. De hecho, en esa correspondencia, el Ministro reiteraba una serie de instrucciones destinadas a librarse para siempre de los suboficiales y solucionar de manera definitiva sus reclamaciones. Entre las instrucciones a seguir que recoge la carta, los responsables militares fueron llamados a eliminar a todos los suboficiales promotores de esta crisis y a expulsar salvajemente a sus familiares de los cuarteles<sup>8</sup>.

2.16 El 12 de agosto de 2010, el consejo de guerra condenó al autor a una pena de diez años de prisión por complot militar. En su resolución, se indica que las torturas sufridas fueron denunciadas en varias ocasiones durante las vistas<sup>9</sup>. El 13 de agosto de 2010, el autor presentó un recurso ante el Tribunal Militar. En su alegato, el autor menciona las torturas a las que fue sometido y contra las que no se adoptó medida alguna. En su requerimiento de 27 de enero de 2011, el ministerio fiscal se refiere a las acusaciones formuladas por el autor y alega que este no ha presentado ninguna prueba en la que se fundamenten tales acusaciones<sup>10</sup>. No obstante, el ministerio fiscal nunca realizó investigación alguna al respecto, ni requirió la intervención de un médico forense, a pesar de las denuncias de tortura de las que tenía pleno conocimiento y de que le competía de conformidad con el artículo 97 de la Ley núm. 1/015, de 20 de julio de 1999, de Reforma del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, todas las peticiones del autor de ver a un médico y recibir atención fueron rechazadas.

2.17 El 28 de enero de 2011, en su réplica al requerimiento del auditor general ante el Tribunal Militar de Bujumbura, el autor denunció de nuevo las torturas sufridas a manos de los agentes del Estado e indicó que esas acusaciones no habían sido tenidas en cuenta hasta entonces. No obstante, el 3 de marzo de 2011, el Tribunal Militar confirmó la resolución del consejo de guerra y consideró que no se había aportado ninguna prueba que respaldase las acusaciones de tortura. En cambio, no mencionó el hecho de que el juez instructor debería haber iniciado una investigación sobre unas acusaciones de tal gravedad y haber solicitado la intervención de un médico forense según dispone la ley. Tampoco hizo referencia alguna a que, a pesar de las numerosas peticiones del autor durante los primeros días de su detención, nunca se le permitió consultar a un médico.

2.18 El 7 de marzo de 2011, el autor interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esa resolución<sup>11</sup>.

2.19 Mientras el autor seguía a la espera de que se fijase una fecha para la vista ante el Tribunal Supremo y permanecía privado de libertad en la cárcel de Mpimba, el 24 de diciembre de 2012 le concedieron la libertad condicional en el marco de unas medidas generales adoptadas para reducir el hacinamiento en las cárceles del país.

2.20 Durante las primeras semanas después de su liberación, el autor vivió escondido por temor a sufrir nuevos atentados contra su integridad física y psicológica. Recibió amenazas de los agentes del Servicio Nacional de Inteligencia, que le someten a una vigilancia activa.

<sup>7</sup> El autor presenta una serie de publicaciones en los medios de comunicación que apoyan esa tesis.

<sup>8</sup> La carta se adjunta a la comunicación.

<sup>9</sup> La resolución del consejo de guerra de 12 de agosto de 2010 pone de manifiesto que el autor denunció las torturas sufridas.

<sup>10</sup> El requerimiento del ministerio fiscal menciona las denuncias de tortura formuladas por el autor y no aporta respuesta alguna.

<sup>11</sup> El 4 de mayo de 2015, el abogado del autor informó al Comité de que el Tribunal Supremo había desestimado el recurso del autor en septiembre de 2014 (véase el párr. 5.20).

## La queja

3.1 El autor afirma haber sido víctima de actos de tortura de conformidad con el artículo 1 de la Convención. Padece dolores y sufrimientos agudos, físicos y mentales, y afirma haber sido objeto de unos malos tratos de extrema gravedad que le provocaron sufrimientos agudos y de los que, aún hoy en día, padece secuelas. Ya en el momento de su detención fue golpeado hasta provocarle hemorragias durante 30 minutos mientras estaba inmovilizado; la primera noche, durante el interrogatorio, fue violentamente golpeado con diversos objetos en todo el cuerpo y también en la cabeza. Durante todo el interrogatorio tuvo los brazos esposados a la espalda, y le obligaron a desnudarse y arrodillarse sobre chapas de botellas de cerveza y permaneció en esa dolorosa posición durante más de tres horas, al tiempo que recibía correazos en todo el cuerpo; y le hicieron una incisión en el brazo izquierdo con el cuchillo de un *kalashnikov*. El autor también sufrió humillaciones e insultos y fue mantenido en condiciones inhumanas y amenazado de muerte en varias ocasiones. Como ya se ha mencionado, los hechos han sido corroborados por varias personas (véanse los párrafos 2.4, 2.6, 2.9, 2.10 y 2.12). El autor aún tiene marcas de las torturas en los brazos y las rodillas. También tiene una cicatriz aún visible en el cráneo resultado de los golpes con la culata de las pistolas, casi cuatro años después de que ocurrieran los hechos. Se proporcionan fotos en apoyo de la queja ante el Comité. Desde el punto de vista psicológico, aún padece un trastorno por estrés postraumático.

3.2 Luego, durante casi tres años, el autor permaneció privado de libertad en unas condiciones de reclusión deplorables, primero en la Base de Defensa Antiaérea, luego en los calabozos del Servicio Nacional de Inteligencia y en la cárcel central de Muramvya y, por último, en la cárcel central de Bujumbura. El autor señala que el Comité ya ha tenido la ocasión de considerar que este tipo de tratamientos en privación de libertad, como la ausencia de cuidados, la insalubridad o incluso el hacinamiento en la cárcel, también son elementos constitutivos de tortura<sup>12</sup>.

3.3 El autor añade que esas torturas fueron infligidas de manera intencionada con el fin de obtener una confesión y castigarle. De hecho, en el momento de su detención, el autor estuvo bajo el control total y efectivo de los agentes del Estado, que eran muy numerosos y estaban masivamente armados. Estaba completamente inmovilizado por los agentes, tumbado boca abajo en el suelo y con los brazos atados a la espalda. Los actos infligidos perseguían un objetivo ilegítimo, el de castigar al autor por los hechos de los que era sospechoso. Durante el interrogatorio en la Base de Defensa Antiaérea, el autor fue torturado porque se negó a confesar su implicación en la preparación del presunto golpe de estado y, en particular, su participación en las reuniones de planificación. Los malos tratos continuaron hasta que aceptó firmar el atestado en el que reconocía su culpabilidad. Tales sufrimientos fueron infligidos por agentes del Estado, como militares y agentes del Servicio Nacional de Inteligencia, luego en la cárcel central de Muramvya y, por último, en la cárcel central de Bujumbura. Por lo tanto, se dieron todos los elementos de la tortura, lo que constituye una violación del artículo 1 de la Convención por el Estado parte en relación con el autor.

3.4 A título subsidiario, el autor afirma que los actos sufridos son al menos constitutivos de una violación del artículo 16 de la Convención.

3.5 El autor afirma también que se ha vulnerado el artículo 2, párrafo 1, leído conjuntamente con el artículo 1. En efecto, el autor compareció ante un juez con motivo de su prisión preventiva al cabo de 32 días de ser detenido, es decir, superando con creces los 7 días que prevé la ley. No se le autorizó a recibir ninguna visita durante los primeros días de detención. Tampoco tuvo acceso a un abogado durante las primeras semanas que siguieron a su detención. Además, si bien su estado de salud requería indiscutiblemente atención médica como consecuencia de las torturas sufridas, el autor nunca fue examinado por un médico y no recibió atención alguna durante toda la privación de libertad. Al no permitir que el autor recibiera atención médica, el Estado parte no permitió que se expidiera un certificado médico

<sup>12</sup> El autor hace referencia a las comunicaciones núm. 353/2008, *Slyusar c. Ucrania*, decisión adoptada el 14 de noviembre de 2011, y núm. 172/2000, *Dimitrijevic c. Serbia y Montenegro*, decisión adoptada el 16 de noviembre de 2005.

que constataste las torturas sufridas y, con ello, no se garantizó el derecho del autor a pedir justicia de manera efectiva.

3.6 El Estado parte tampoco cumplió sus obligaciones de investigar las torturas infligidas y llevar a los responsables ante la justicia (véanse los párrafos 2.13 y ss.). Hasta la fecha, a pesar de las numerosas gestiones practicadas para denunciar las torturas infligidas, no se ha abierto ninguna investigación que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades en este caso. El juez instructor y los jueces que intervinieron en la causa nunca solicitaron la intervención de un médico forense, a pesar de las denuncias del autor, que nunca fueron tomadas en consideración y cuyos responsables, si bien eran fáciles de identificar, nunca fueron perseguidos por la justicia. Por otro lado, el autor interpelló a las autoridades administrativas y gubernamentales y a otras instituciones que actuaban en su favor. Es decir, las autoridades de Burundi fueron plenamente informadas de las torturas por diferentes vías y, por lo tanto, no las ignoraban. El hecho de que entre los responsables de las torturas sufridas por el autor haya miembros del Servicio Nacional de Inteligencia hace aún más peligroso para el autor proseguir las gestiones en el plano interno, sobre todo por los importantes medios de presión de los que disponen.

3.7 También se habría incumplido el artículo 11 porque el Estado parte no vigiló debidamente el trato dispensado al autor durante su detención. Por otra parte, dado que las órdenes procedían de altos responsables del ejército de Burundi y de la Policía Nacional, no podía esperarse que impidieran los actos cometidos por sus subordinados. Además, también se produjeron irregularidades procesales relacionadas con la detención del autor, el registro de su domicilio y su privación de libertad. De hecho, al autor no se le presentó orden judicial alguna; el registro de su domicilio, a altas horas de la noche y en unas condiciones traumatizantes para la familia, se realizó sin presentar ninguna orden de registro; el autor no pudo recibir visitas durante los primeros días de su detención; tampoco tuvo acceso a un abogado durante las primeras semanas que siguieron a su detención; y, por último, no compareció ante un juez con motivo de su prisión preventiva hasta transcurridos 32 días desde la detención. El autor recuerda que en Burundi no existen mecanismos eficaces e independientes de vigilancia de los centros de detención. En 2006, el Comité mostró su preocupación por la falta de una vigilancia sistemática eficaz de todos los lugares de detención, en particular de visitas regulares y sin previo aviso de estos lugares por inspectores nacionales, y de un mecanismo de supervisión legislativa y judicial (véase [CAT/C/BDI/CO/1](#), párr. 19).

3.8 El autor considera que el Estado parte ha vulnerado los artículos 12 y 13 de la Convención. En efecto, ha faltado a su obligación de llevar a cabo una investigación diligente e imparcial cuando las autoridades habían sido claramente informadas de las torturas sufridas por el autor, tanto mediante las denuncias públicas e interpellaciones directas de los organismos de defensa de derechos humanos de las que se hicieron eco ampliamente los medios de comunicación, como mediante las numerosas denuncias presentadas por el propio autor ante las diferentes autoridades judiciales, todas ellas con competencias para investigar unas acusaciones tan graves. Además, el Estado parte no adoptó ninguna medida de protección del autor para que no fuera víctima de intimidación por las actuaciones iniciadas ante las autoridades judiciales.

3.9 Por último, el autor afirma que se ha contravenido el artículo 14 de la Convención puesto que el Estado parte no respetó la obligación de garantizarle el derecho a una reparación, si bien han transcurrido cinco años desde los hechos. Tras las torturas sufridas, el autor no se ha beneficiado de medida de rehabilitación alguna para una readaptación lo más completa posible, tanto en el plano físico y psicológico, como social y financiero. Aún en la actualidad vive en una gran precariedad. Tampoco se ha beneficiado de medidas de readaptación, no ha sido readmitido en el ejército y encuentra grandes dificultades para reintegrarse en la vida profesional y social. No se ha iniciado ninguna actuación contra los responsables de las torturas que, por consiguiente, no han sido sancionados. Sus actos siguen impunes y el Estado parte no ha adoptado medidas que garanticen que los hechos no se repitan.

### Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1 El 28 de abril de 2014, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación.

4.2 El Estado parte impugna la admisibilidad de la queja porque no se han agotado las vías de recurso de la jurisdicción interna, dado que la queja remitida por el autor a la fiscalía está tramitándose y, por lo tanto, el proceso no ha finalizado. Por otro lado, el autor interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Burundi contra la sentencia dictada por el Tribunal Militar. En el momento de la presentación de las observaciones, este recurso aún se estaba tramitando<sup>13</sup>.

4.3 Sobre el fondo, el Estado parte rechaza todas las acusaciones del autor, en particular, las denuncias de tortura que no han sido contrastadas con elementos de prueba. Además, al contrario de lo que declara el autor, fue identificado como el jefe de unos delinquentes y los actos que se le imputan fueron constatados en flagrante delito.

4.4 El Estado parte señala que al autor le interesa describir un contexto general en Burundi donde prevalece desde hace unos años la impunidad para mostrar que él mismo ha sido víctima de esa impunidad, puesto que es la situación existente.

4.5 En cuanto a las denuncias de tortura y las pruebas a que el autor hace referencia, el Estado parte responde que las declaraciones del otro detenido (véase el párrafo 2.6) no pueden considerarse como un medio de prueba dado que a este no le quedaba otra alternativa que apoyar a su cómplice por simple solidaridad, aunque estuviera equivocado. Además, los agentes de la policía judicial que le tomaron declaración y realizaron los interrogatorios no tenían necesidad de torturar al autor puesto que otro de los acusados acababa de denunciar y confesar la conspiración.

4.6 En cuanto al traslado del autor entre diferentes centros de detención, se trata de un método completamente normal que se utiliza para mejorar la eficacia de las investigaciones y no con el objetivo de crear malas condiciones para los sospechosos a fin de infligirles torturas de cualquier naturaleza.

4.7 Los periodistas y organismos de defensa de derechos humanos solo se hicieron eco y aportaron pruebas tangibles de las operaciones llevadas a cabo por los militares durante la detención, que conllevaron lesiones únicamente porque los militares golpistas, entre los que se encontraba el autor, opusieron resistencia. La periodista que presencié los hechos reprochados durante la detención llegó al final de la operación, antes de que el autor y los demás sospechosos fueran trasladados.

4.8 Las malas condiciones de reclusión vividas por el autor no difieren de las de las demás personas encarceladas en Burundi, condiciones que se deben únicamente a la insuficiencia de medios y, en ocasiones, al hacinamiento en las cárceles. Las malas condiciones de reclusión, cuyas causas el Estado parte no cesa de analizar, no constituyen un acto de tortura que estuviera reservado al autor. Además, el autor no se refiere a ninguna tortura sufrida en esos centros penitenciarios.

4.9 Las denuncias del autor carecen de fundamento, como lo demuestran las diferentes resoluciones judiciales pronunciadas por las cortes y tribunales al respecto, que han dictado y confirmado las condenas a penas severas de los sospechosos, incluido el autor. Aun así, el autor recurrió a la fiscalía, cuya labor consiste en examinar esta queja, que denuncia unos hechos relativamente antiguos y que revisten una complejidad evidente. A pesar de que el proceso estaba abierto, el autor recurrió inmediatamente al Comité, haciendo caso omiso de la obligación de agotar las vías de recurso internas.

4.10 Con respecto a las torturas denunciadas, el Estado parte reitera que las organizaciones de derechos humanos no han hecho más que apoyar las afirmaciones del autor sin pruebas concretas; que los sufrimientos descritos por el autor son consecuencia únicamente del trato que recibió en el momento de la detención; y que, durante dicha detención, no se puede atribuir ningún acto deliberado a las autoridades militares, que se enfrentaron a la resistencia de las personas detenidas, incluido el autor. El Estado parte considera que los insultos

<sup>13</sup> Desde entonces, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia, véase el párr. 5.20.

proferidos contra el autor y los demás sospechosos deben contextualizarse y no constituyen actos de tortura. El propio autor admite que después de ser detenido, fue inmovilizado, lo que confirma que previamente hubo combates en el lugar de la detención y que las lesiones ocasionadas durante tales enfrentamientos no equivaldrían a tortura.

4.11 El autor debería agradecer haberse beneficiado de la clemencia del Estado parte, que le puso en libertad condicional el 24 de diciembre de 2012.

4.12 Durante el interrogatorio, el simulacro de ejecución mencionado por el autor no equivale a un acto de tortura, sino probablemente a un gesto “disuasorio”. El Estado parte niega también la denuncia del autor de que no recibió atención médica después de su detención, ya que, según el Estado parte, la legislación internacional reconoce el derecho de acceder a atención médica a todos los presos. Por otro lado, el autor recibió la atención necesaria cuando su estado de salud era preocupante<sup>14</sup>.

4.13 En relación a la correspondencia enviada por el Ministro de Defensa Nacional y Veteranos de Guerra a varios responsables militares a finales de 2009 (párr. 2.15), el Estado parte destaca que, en contra de los temores del autor, la correspondencia del Ministro no tenía ninguna intención de dirigirse a un solo individuo, sino al grupo que él encabezaba. El Estado parte añade que el proceso del autor y los demás acusados se desarrolló de conformidad con la legislación nacional, y que los interesados contaron con asistencia letrada y se beneficiaron de su derecho a la defensa. A pesar de la gravedad de los hechos que se le imputaban, el Estado parte mostró clemencia al dictar la puesta en libertad condicional del autor y los demás acusados.

4.14 En cuanto al artículo 11, el Estado parte indica que todos los presos, tanto de las comisarías como de las prisiones, figuran en un registro y tienen derecho a asistencia letrada, incluso gratuita, y que al autor no se le negó tal derecho. Al contrario de lo que afirma el autor, recibió visitas de familiares al igual que el resto de presos, incluso se le autorizó a salir, apeló contra su sentencia mediante la presentación de recursos judiciales, y tuvo la ocasión de escribir a las autoridades administrativas y a diferentes responsables de organizaciones de derechos humanos.

4.15 Respecto de la acción pública, el Estado parte señala que no le correspondía al juez instructor acusado de tortura abrir una investigación contra él mismo; que, por lo tanto, le correspondía al autor presentar una querrela; y que el interesado interpuso efectivamente una querrela ante la fiscalía que, con toda seguridad, realizará una investigación que cerrará con una resolución equitativa después de analizar minuciosamente los hechos. Dicha investigación con la colaboración del autor está en entredicho dado que este ha considerado inútiles los recursos internos, al recurrir al Comité y abandonar de hecho su querrela ante la fiscalía.

4.16 Al contrario de lo que afirma el autor, el Estado parte ha adoptado todas las medidas legislativas y de otra índole para prevenir la práctica de la tortura. De hecho, el Código Penal promulgado en 2009 consagra un capítulo a la definición y represión de la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículos 204 a 209 del Código Penal), y esa es una de las innovaciones más importantes que incluye el Código.

4.17 En relación con el artículo 12, el Estado parte reitera que, a falta de pruebas sobre las presuntas torturas sufridas durante los interrogatorios, las autoridades judiciales no podían ordenar investigación alguna a falta de datos fundados, tanto más cuando el autor formuló esas acusaciones únicamente para alarmar a la opinión pública y librarse de las actuaciones iniciadas contra él.

4.18 Teniendo en cuenta que no se aportaron pruebas de ninguna de las torturas sufridas por el autor, el Estado parte no ha vulnerado el artículo 13. Por lo tanto, esa afirmación queda refutada, a reserva de los resultados de las investigaciones de la fiscalía si el interesado consigue aportar pruebas de tales acusaciones.

---

<sup>14</sup> El Estado parte no aporta ningún elemento que atestigüe que el autor recibiera la atención médica mencionada.



4.19 En cuanto al artículo 16, las acusaciones del autor solo se refieren al argumento del hacinamiento en las cárceles en las que estuvo preso, ignorando así que no se encontraba solo en esos lugares y que compartía dichas dificultades con otros muchos presos.

4.20 En cuanto a las medidas de protección solicitadas por el autor ante posibles represalias contra su persona, el Estado parte señala que el autor presentó una querrela ante la fiscalía sin temer por su integridad física; que el Estado parte se mostró incluso clemente al dictar su puesta en libertad provisional; y que en la actualidad disfruta de libertad de circulación. El Estado parte insiste en que es su obligación proteger a las personas que viven en su territorio y afirma que ninguna persona que haya presentado una queja ante el Comité se ha sentido intimidada y que la adopción de medidas especiales en este caso resulta improcedente.

### **Comentarios del autor sobre la admisibilidad y el fondo**

5.1 El 17 de agosto de 2014, el autor puso de manifiesto que el Estado parte no había cumplido con su obligación procesal de informar con precisión al Comité del estado del proceso interno en relación con el autor.

5.2 El Estado parte entiende que el autor no puede quejarse de las torturas sufridas e intentar obtener justicia, puesto que se benefició de una medida de puesta en libertad y, por consiguiente, habría desafiado a las autoridades al recurrir al Comité. Ahora bien, esa posición no es aceptable habida cuenta de la gravedad de los hechos. El artículo 2, párrafo 2, de la Convención dispone, sin la menor ambigüedad, que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura, y menciona explícitamente como ejemplo las situaciones de inestabilidad política interna. Al considerar que la medida de excarcelación de la que se benefició el autor, cuya aplicación objetiva e imparcial respondía, por otro lado, a criterios fijos preceptivos, debería impedir la iniciación de actuaciones ante el Comité para que se haga justicia, el Estado parte fomenta la impunidad de los responsables de las torturas e intenta disuadir a las víctimas de que inicien acciones para obtener justicia. El autor solo ha hecho uso del derecho que le reconoce el propio Estado parte en virtud del artículo 22 de la Convención.

5.3 En cuanto al argumento del Estado parte del párrafo 4.15, la presentación de una queja ante el Comité no conlleva en modo alguno el abandono de la querrela interpuesta ante las autoridades judiciales de Burundi y responde a la pasividad de las autoridades judiciales ante las numerosas actuaciones iniciadas por el autor en vano.

5.4 En lo que se refiere a la conveniencia de la aplicación de medidas de protección, las personas responsables de los actos de tortura son altos cargos del ejército nacional y agentes del Servicio Nacional de Inteligencia que gozan de poderes y medios de presión importantes. Esto hace que sea legítimo temer represalias contra el autor, especialmente dada la impunidad generalizada de la que gozan los autores de tales delitos, como se ha expuesto ampliamente en la queja inicial. La situación actual, que se ha degradado de manera notable, ha sido denunciada por numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos y por las Naciones Unidas<sup>15</sup>.

5.5 El autor reconoce que Burundi ha respetado plenamente las medidas provisionales adoptadas en todos los procedimientos abiertos por el Comité en su contra. Esto demuestra una vez más la oportunidad y utilidad encomiables de esas medidas, y se invita al Estado parte a que siga aplicándolas.

5.6 Con respecto al agotamiento de los recursos internos, el artículo 22 prevé que se exima al autor de esa exigencia cuando se hayan superado unos plazos razonables. De ese modo, el Comité consideró que un período de 15 meses antes de iniciar una investigación sobre denuncias de tortura, que no había concluido al cabo de los 2 años que precedieron al examen de la comunicación por el Comité, constituye un plazo excesivo que justifica que el autor no agotara las vías de recurso internas<sup>16</sup>. El Comité consideró que unos plazos mucho más cortos siguen sin ser razonables, y concluyó que un período de 19 días es excesivo ante la exigencia

<sup>15</sup> El autor se refiere a “Burundi: Navi Pillay dénonce les restrictions croissantes des droits civils et politiques avant les élections de 2015”, 7 de marzo de 2014.

<sup>16</sup> Comunicación núm. 8/1991, *Halimi Nedzibi c. Austria*, decisión adoptada el 18 de noviembre de 1993, párr. 6.2.

de que se proceda con prontitud al inicio de la investigación<sup>17</sup>. Por lo tanto, no es admisible el argumento de que los hechos denunciados el 2 de marzo de 2010, es decir, hace más de cinco años, siguen siendo objeto de una investigación. No cabe duda de que se trata de un plazo excesivo que, de conformidad con la jurisprudencia del Comité, debería llevarlo a eximir al autor de la obligación de agotar las vías de recurso internas.

5.7 Además, conviene señalar que el Estado parte no ha aportado ninguna prueba material que demuestre que la investigación sigue abierta, a pesar de que es el único que puede presentar elementos como actos de investigación, atestados o actas de las vistas. Por esa razón, es legítimo cuestionar la existencia misma de dicha investigación. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, no es necesario presentar una queja oficial, ni se requiere una declaración expresa de voluntad de ejercer la acción penal<sup>18</sup>.

5.8 Por último, el Estado parte parece indeciso en sus observaciones en cuanto a su intención de esclarecer este caso. Por un lado, pide al Comité que remita al autor a las autoridades judiciales de ese país para seguir el proceso, y por otro, dado que considera que el autor ha abandonado el proceso al recurrir al Comité, indica que no procede pedir a Burundi que abra una investigación. Esa falta de claridad refuerza aún más la idea de que las vías de recurso internas no beneficiarán al autor y son, por lo tanto, ineficaces.

5.9 Sobre el fondo, al contrario de lo que afirma el Estado parte, el autor sí que ha presentado pruebas para respaldar sus denuncias, como ya se demostró ampliamente en la queja inicial. En primer lugar, el testimonio de la periodista, que no afirma haber estado presente durante toda la intervención, pero que fue un testigo directo de una parte de la escena, esclarece el estado preocupante en el que se encontraban los militares detenidos. Dicho testimonio también indica que, mientras que los militares estaban en el suelo, inmovilizados, les seguían pateando la espalda.

5.10 Además, la otra persona detenida a la que se refiere el autor ha presentado por su parte otra queja al Comité (comunicación núm. 553/2013). Por otro lado, los representantes de las organizaciones de derechos humanos mencionadas no se basan en las afirmaciones del autor, sino en lo que constataron cuando visitaron la Base de Defensa Antiaérea y se reunieron con las personas detenidas, entre ellas, el autor. Tras la entrevista que mantuvieron con el autor, las organizaciones no gubernamentales indicaron que las señales de tortura eran visibles en su cuerpo.

5.11 El Estado parte omite las demás pruebas presentadas, como las fotos que muestran las secuelas físicas aún presentes varios años después de que ocurrieran los hechos y que corresponden a la descripción de las torturas que hizo el autor, en particular, el hecho de que se le obligó a permanecer arrodillado sobre chapas de botellas de cerveza y que recibió golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Cabe concluir que la validez de esos elementos es incuestionable a falta de comentarios del Estado parte.

5.12 En cuanto al simulacro de ejecución, el Comité contra la Tortura ya ha señalado que el hecho de apuntar con una pistola a la sien de un individuo constituye un método de tortura (véase CAT/C/75, párr. 143). Además, tanto el Comité contra la Tortura como el Comité de Derechos Humanos consideraron en varias ocasiones que las amenazas, en particular contra la vida de una persona, asociadas a otros actos, son constitutivas de tortura (véase A/52/44, párr. 257)<sup>19</sup>. Por otro lado, los insultos contra una persona bajo el control de los agentes del Estado acentúan el grado de sufrimiento infligido y el carácter degradante del trato y, por ello, contribuyen a la calificación de los malos tratos como tortura.

5.13 Sobre las condiciones de reclusión, el Comité ya consideró que las malas condiciones de reclusión, como la ausencia de atención médica y, por extensión, su carácter inadecuado,

<sup>17</sup> Comunicación núm. 59/1996, *Blanco Abad c. España*, decisión adoptada el 14 de mayo de 1998, párr. 8.2.

<sup>18</sup> El autor se refiere, en particular, a la comunicación núm. 6/1990, *Parot c. España*, decisión adoptada el 2 de mayo de 1995, y a *Blanco Abad c. España*.

<sup>19</sup> El autor se refiere, en particular, a las comunicaciones núm. 258/2004, *Mostafa Dadar c. el Canadá*, decisión adoptada el 23 de noviembre de 2005, y núm. 279/2005, *C. T. y K. M. c. Suecia*, decisión adoptada el 17 de noviembre de 2006. Comité de Derechos Humanos, comunicación núm. 1353/2005, *Njaru c. el Camerún*, dictamen aprobado el 19 de marzo de 2007, párrs. 3.1 y 6.1.

la insalubridad o incluso el hacinamiento en las cárceles deben tenerse en cuenta para concluir que el preso fue víctima de tortura<sup>20</sup>. Ahora bien, el reconocimiento internacional del derecho de los presos a recibir atención médica lamentablemente no garantiza que este principio se respete en la práctica. El autor mantiene que no recibió la atención médica que su estado requería. Por otra parte, el argumento de que todos los presos sufren las mismas condiciones de reclusión, que se deben a una falta de medios, no justifica la situación del autor, ni exime en modo alguno al Estado parte de sus responsabilidades en la materia.

5.14 El autor sostiene que las torturas infligidas en el momento de la detención, lo que el Estado parte denomina de manera lamentable “desventuras” para minimizar su gravedad, perseguían un objetivo punitivo. En una decisión reciente contra Burundi, el Comité ya ha reconocido que las palizas propinadas a un hombre por un grupo numeroso de agentes de policía que luego proceden a su detención, ya sea al margen del interrogatorio o de la detención, persiguen un objetivo punitivo e intimidatorio y deben calificarse como tortura en virtud del artículo 1 de la Convención<sup>21</sup>. Además, el autor no estaba armado, lo que no ha sido desmentido, ni mencionado por el Estado parte.

5.15 Con respecto a la correspondencia del Ministro de Defensa, el hecho de que se refiriera al grupo entero del que formaba parte el autor no disminuye en absoluto su carácter agresivo. Dicha correspondencia sigue indicando que los actos eran intencionados y estaban planificados.

5.16 En contra de lo que afirma el Estado parte, el autor mantiene que no compareció ante el juez en los plazos que establece la ley para confirmar la privación de libertad; que no se le autorizó a recibir visitas los primeros días de su detención y que, además, a una organización no gubernamental le fue denegado inicialmente el acceso a los militares; que tampoco tuvo acceso a un abogado durante las primeras semanas de su detención y que los recursos interpuestos no se referían a su queja por tortura, sino al proceso iniciado contra él; que no recibió la debida atención médica; y, por último, que su queja no fue examinada de manera inmediata por la apertura de una investigación y que nunca recibió reparación alguna.

5.17 En cuanto a los artículos 12 y 13, las autoridades deberían haber abierto una investigación de oficio en base a las acusaciones formuladas por el autor en diversas ocasiones; en virtud de esos mismos artículos, las autoridades deberían haber procedido a una investigación de manera pronta e inmediata. Por las razones mencionadas, también hubo incumplimiento del artículo 14.

5.18 Por último, sobre el artículo 16, como ya se ha mencionado, el argumento de que todos los presos sufren las mismas condiciones de reclusión no justifica la situación del autor, ni exime en modo alguno al Estado parte de sus responsabilidades en la materia. El autor se refiere asimismo a la reciente jurisprudencia del Comité sobre Burundi en la que concluyó que las malas condiciones de reclusión sufridas por el autor a manos de las autoridades de ese país constituyen una violación del artículo 16 de la Convención y, por lo tanto, equivalen a tratos crueles e inhumanos<sup>22</sup>.

5.19 Habida cuenta de lo que antecede, el autor solicita al Comité que declare la violación de los artículos mencionados; que pida al Estado parte que proceda a una investigación pronta, profunda y eficaz sobre las torturas infligidas; que le pida que ofrezca una reparación apropiada al autor, con inclusión de medidas de indemnización por los daños patrimoniales y morales ocasionados, restitución, rehabilitación y satisfacción, y garantías de no repetición; y que pida al Estado parte que modifique su legislación para que la acción pública sea imprescriptible para los actos de tortura, con independencia del contexto en el que se practiquen, y para que se consagre de manera explícita la obligación de las autoridades de proceder de oficio a investigaciones independientes e imparciales en cuanto tengan conocimiento de actos de tortura cometidos por sus agentes.

5.20 El 4 de mayo de 2015, el abogado defensor del autor informó al Comité de que, el 30 de julio de 2014, se había celebrado finalmente una vista ante el Tribunal Supremo con

<sup>20</sup> El autor se refiere, en particular, a *Slyusar c. Ucrania* y a *Dimitrijevic c. Serbia y Montenegro*.

<sup>21</sup> Comunicación núm. 503/2012, *Ntikarahera c. Burundi*, decisión adoptada el 12 de mayo de 2014, párr. 6.2.

<sup>22</sup> *Ntikarahera c. Burundi*, párr. 6.6.

motivo del recurso de casación, pero los interesados, incluido el autor, no habían sido convocados. Añadió que, en septiembre de 2014, el Tribunal Supremo pronunció su resolución y rechazó el recurso de casación. La decisión nunca fue notificada formalmente al autor, que la conoció por otro condenado en el mismo caso que sí estuvo presente en la vista.

### **Deliberaciones del Comité**

#### *Examen de la admisibilidad*

6.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una queja, el Comité se cerciora, en cumplimiento del párrafo 5 a) del artículo 22 de la Convención, de que el mismo asunto no ha sido ni está siendo examinado por otro procedimiento de investigación o arreglo internacional.

6.2 El Comité toma nota de que el Estado parte ha impugnado la admisibilidad de la queja por no haberse agotado las vías de recurso internas en la medida en que, por un lado, habría un recurso de casación contra la condena del autor pendiente y, por otro, la investigación de la fiscalía sobre las acusaciones de tortura del autor seguiría abierta. En cuanto a la primera excepción de inadmisibilidad, según las observaciones del Estado parte, el Comité señala que el Tribunal Supremo dictó sentencia desestimatoria del recurso interpuesto por el autor y los demás acusados<sup>23</sup>. El Comité observa que el Estado parte no ha negado esa afirmación. En esas circunstancias, y sin que sea necesario que se pronuncie sobre la utilidad de un recurso de esa índole sobre las acusaciones de tortura del autor, el Comité considera que no hay lugar para esa excepción de inadmisibilidad.

6.3 En relación a la segunda excepción de inadmisibilidad, el Comité observa que el autor denunció en numerosas ocasiones los malos tratos ante las autoridades nacionales competentes. El Estado parte solo se pronunció en contra de las denuncias de tortura del autor en el proceso que comenzó en marzo de 2010, cuando este denunció haber sido torturado en el momento de la detención y durante los interrogatorios. Por lo tanto, el Comité constata que las autoridades competentes fueron informadas de las denuncias de tortura formuladas por el autor, y recuerda que no se aplica la norma del agotamiento de los recursos internos si su tramitación se ha prolongado o puede prolongarse injustificadamente o si es poco probable que dichos recursos otorguen un amparo efectivo a la presunta víctima<sup>24</sup>. El Comité considera que el autor ha tratado de manera razonable y suficiente de agotar los recursos internos, pero ha sido en vano. Ahora bien, según los atestados y las actas de las vistas, de los que se presentaron copias al Comité, el ministerio fiscal está informado de las denuncias del autor desde marzo de 2010, pero, hasta la fecha, no hay ninguna prueba de que se haya abierto una investigación o iniciado diligencia alguna. Por esa razón, el Comité considera que los procedimientos de apelación han excedido unos plazos razonables y los requisitos establecidos en el párrafo 5 b) del artículo 22 de la Convención no le impiden examinar la comunicación en cuanto al fondo.

6.4 El Comité concluye, por lo tanto, que la comunicación es admisible a tenor del párrafo 5 b) del artículo 22 de la Convención.

#### *Examen de la cuestión en cuanto al fondo*

7.1 El Comité ha examinado la comunicación a la luz de toda la información puesta a su disposición por las partes, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 22 de la Convención.

7.2 El Comité toma conocimiento de la denuncia del autor de que, el 29 de enero de 2010, en el momento de su detención por agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y el

<sup>23</sup> El 4 de mayo de 2015, el abogado del autor informó al Comité de que se había celebrado una vista ante el Tribunal Supremo el 30 de julio de 2014. No obstante, ni el autor ni las demás personas afectadas fueron citadas, a excepción de uno de los acusados, que transmitió la información. En septiembre de 2014, el Tribunal Supremo dictó sentencia y desestimó el recurso de casación. Sin embargo, la decisión no fue notificada a los interesados, por lo que el abogado no pudo presentarla.

<sup>24</sup> Comunicación núm. 441/2010, *Evloev c. Kazajstán*, decisión adoptada el 5 de noviembre de 2013, párr. 8.6.

Comandante de la Primera Región Militar y sus siete guardaespaldas, fue golpeado hasta provocarle hemorragias durante 30 minutos cuando ya estaba inmovilizado; que, en el momento de su interrogatorio la primera noche, fue golpeado violentamente con diversos objetos en todo el cuerpo y en la cabeza; que, durante todo el interrogatorio, tenía los brazos esposados a la espalda, fue desnudado a la fuerza y obligado a arrodillarse sobre chapas de botellas de cerveza y permanecer en esa posición durante más de tres horas, al tiempo que recibía correazos en todo el cuerpo; y que le hicieron una incisión en el brazo izquierdo con el cuchillo de un *kalashnikov*. El Comité toma nota de la denuncia del autor de que también sufrió humillaciones e insultos, se le mantuvo en condiciones inhumanas y fue amenazado de muerte en varias ocasiones. El Comité indica que, según el autor, el trato al que fue sometido durante la detención y los interrogatorios tenía como objetivo castigarle y arrancarle una confesión.

7.3 El Comité observa la respuesta del Estado parte de que el trato sufrido por el autor durante su detención, que le dejó marcas en el cuerpo, se debió a la resistencia que opuso y que, por lo tanto, exigió una respuesta adecuada para inmovilizar al individuo. Observa también la respuesta del Estado parte de que, en cuanto al interrogatorio, el autor no ha podido presentar ninguna prueba de tortura alguna. El Comité observa además la respuesta del Estado parte de que el simulacro de ejecución practicado al autor no podría considerarse tortura, sino más bien una medida “disuasoria”.

7.4 El Comité constata los numerosos elementos de prueba presentados por el autor para apoyar su comunicación ante el Comité, elementos que incluyen los testimonios de una periodista que presencié el momento de su detención y de otro de los detenidos, informes de organizaciones de derechos humanos que tuvieron acceso al autor durante la detención y fotos de las marcas en el cuerpo del autor que corroboran sus denuncias. El Comité señala que, en lo que se refiere al trato sufrido por el autor durante la detención y las amenazas contra su vida durante el período de interrogatorio, el Estado parte solo ha negado que dicho trato pudiera constituir un acto de tortura, sin negar, por otro lado, que se hubiera infligido.

7.5 Sobre la base de la información puesta a disposición, el Comité concluye que se reúnen todos los elementos constitutivos de tortura y que el trato infligido al autor durante la detención y los interrogatorios contravienen el artículo 1 de la Convención.

7.6 Además, el Comité señala que, a los malos tratos, se sumarían humillaciones y castigos como obligar al autor a desnudarse y dormir con los brazos y las piernas esposados sobre un suelo de cemento muy frío durante uno de los interrogatorios, algo que el Estado parte no ha negado que ocurriera. El Comité observa también la acusación de que tales tratos fueron infligidos en un contexto en el que el autor no tuvo acceso a un juez hasta transcurridos 32 días, ni a visitas, ni a la presencia de un abogado, ni a atención médica, y que el Estado parte, aparte de rechazar unas acusaciones tan graves, no ha aportado ninguna prueba que las contradiga. El Comité concluye que las humillaciones y condiciones de reclusión extremas que se suman a los malos tratos sufridos y a la aparente ausencia de atención médica prestada en consecuencia también vulneran el artículo 1 de la Convención.

7.7 En relación al artículo 16 de la Convención, el Comité señala que, tras los interrogatorios que se desarrollaron en unas condiciones de reclusión preocupantes, el autor permaneció detenido durante 39 días en la cárcel de Muramvya, en condiciones de hacinamiento, sin la atención médica adecuada y sin la supervisión de un juez de la prisión preventiva; que luego fue trasladado a la cárcel central de Mpimba de Bujumbura, donde estuvo encarcelado con otra persona durante dos años y nueve meses en una celda de unos 4 m<sup>2</sup> que solo disponía de una pequeña ventana enrejada; y que las raciones alimentarias fueron a su juicio mínimas. El Comité indica que el Estado parte reconoce las condiciones de reclusión preocupantes en las que el autor estuvo privado de libertad. El Comité recuerda también la profunda preocupación expresada en sus últimas observaciones finales sobre el hacinamiento en las cárceles de Burundi (véase [CAT/C/BDI/CO/2](#), párr. 15). En las circunstancias del presente caso, el Comité considera que el conjunto de las condiciones de reclusión sufridas por el autor desde su detención el 29 de enero de 2010 hasta su puesta en libertad condicional constituyen un incumplimiento más del artículo 16 de la Convención.

7.8 El Comité observa la denuncia del autor de que el Estado parte ha incumplido la obligación que le incumbe de impedir y sancionar los actos de tortura padecidos por la

víctima a tenor del párrafo 1 del artículo 2, leído conjuntamente con el artículo 1 de la Convención. En ese sentido, indica que, según el autor, no compareció ante un juez para que decidiera sobre su prisión preventiva hasta 32 días después de ser detenido; que no pudo recibir visitas durante los primeros días de su detención; que tampoco tuvo acceso a un abogado durante las primeras semanas tras su detención; y que no tuvo acceso a los cuidados médicos que su estado requería<sup>25</sup>. También señala la denuncia de que el Estado parte no cumplió su deber de investigar las torturas infligidas al autor y enjuiciar a los presuntos responsables. El Comité observa que el Estado parte se ha limitado a rechazar las acusaciones del autor por considerarlas infundadas, sin aportar elementos o documentos que demuestren que el autor compareció ante un juez en el plazo establecido por la ley o documentos o registros que atestigüen que recibió la visita de abogados y médicos. A la luz de la información remitida al Comité, este considera que el autor ha sido y sigue siendo víctima de una violación del artículo 2, párrafo 1, leído conjuntamente con el artículo 1 de la Convención.

7.9 El Comité se refiere al argumento del autor de que se habría vulnerado el artículo 11, puesto que el Estado parte no ejerció la vigilancia necesaria del trato que le fue dispensado durante su detención y se produjeron diversas irregularidades procesales en el momento de su detención y durante su privación de libertad, sin que las autoridades judiciales señalaran ninguna de ellas. El Comité recuerda sus últimas observaciones finales sobre Burundi, en las que mostró su preocupación por la duración excesiva de la detención policial; los numerosos casos en que sobrepasan los plazos de dicha detención; el no mantenimiento de registros de detención o el carácter incompleto de estos; el no respeto de las salvaguardias legales fundamentales de las personas privadas de libertad; la ausencia de disposiciones que contemplen el acceso a un médico y a la asistencia jurídica en el caso de las personas sin recursos; y la utilización excesiva de la prisión preventiva en ausencia de un control periódico de su legalidad y de una limitación de su duración total (véase [CAT/C/BDI/CO/2](#), párr. 10). En el presente caso, el autor parece haber escapado a todo control judicial antes de comparecer ante el juez solo 32 días después de su detención; durante los primeros días de su privación de libertad, no habría tenido acceso a un abogado ni a su familia; y durante ese mismo período habría sido torturado. Ahora bien, ninguna de esas acusaciones ha sido refutada mediante ningún documento presentado por el Estado parte que establezca que la detención del autor sí que estuvo sujeta a vigilancia por su parte. A falta de información probatoria que contradiga la acusación del autor, el Comité concluye que, en el presente caso, el Estado parte ha vulnerado el artículo 11 de la Convención.

7.10 En cuanto a los artículos 12 y 13 de la Convención, el Comité ha tomado nota de las denuncias del autor, según las cuales, a pesar de las numerosas actuaciones emprendidas para denunciar las torturas infligidas, no se abrió ninguna investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso; el juez instructor y los jueces que conocieron del asunto nunca exigieron la intervención de un médico forense a pesar de las denuncias del autor; y, hasta la fecha, la fiscalía no ha abierto ninguna investigación a pesar de las denuncias de actos de tortura del autor desde las primeras vistas del proceso en marzo de 2010. El Comité señala el argumento del Estado parte de que se trata de un caso complejo y conviene permitir a la fiscalía que proceda a la investigación de tales hechos. El Comité recuerda su jurisprudencia reiterada en el sentido de que el Estado parte tiene la obligación de llevar a cabo una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura<sup>26</sup>. En este sentido, el Comité indica que cinco años después de los hechos, no parece que se haya dado curso a la queja del autor y que, por otro lado, el Estado parte no aporta ninguna prueba de investigación alguna abierta al respecto. El Comité considera que tal demora en la apertura de una investigación sobre denuncias de tortura es manifiestamente abusiva y contraviene claramente las obligaciones que incumben al Estado parte en virtud del artículo 12 de la Convención, que exige que se proceda a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura. Al no haber cumplido esta obligación, el Estado parte también

<sup>25</sup> Comunicaciones núm. 269/2005, *Ali Ben Salem c. Túnez*, decisión adoptada el 7 de noviembre de 2007, párr. 16.4, y núm. 402/2009, *Abdelmalek c. Argelia*, decisión adoptada el 23 de mayo de 2014, párr. 11.5.

<sup>26</sup> *Ali Ben Salem c. Túnez*, párr. 16.7, y *Abdelmalek c. Argelia*, párr. 11.7.

ha eludido la responsabilidad que le corresponde, en virtud del artículo 13 de la Convención, de garantizar al autor el derecho a presentar una queja, que presupone que las autoridades darán una respuesta adecuada a dicha queja mediante la apertura de una investigación pronta e imparcial<sup>27</sup>.

7.11 En cuanto a la presunta violación del artículo 14 de la Convención, el Comité observa las afirmaciones del autor de que el Estado parte le privó de toda reparación al no dar curso a su queja y no proceder inmediatamente a realizar una investigación. El Comité señala que el Estado parte se ha limitado a decir que, dado que no se ha probado ningún acto de tortura, no procede reivindicar ningún derecho a reparación. El Comité recuerda su observación general núm. 3 (2012), relativa a la aplicación del artículo 14 por los Estados partes<sup>28</sup>, y en particular el hecho de que una reparación por actos de tortura debe englobar todos los daños sufridos por la víctima y entraña, entre otras medidas, la restitución, la indemnización y otras medidas adecuadas para garantizar que no se repitan las violaciones, teniendo siempre en cuenta las circunstancias de cada caso<sup>29</sup>. Habida cuenta de que no se ha realizado una investigación diligente de manera rápida e imparcial, a pesar de las numerosas denuncias de los actos de tortura padecidos por el autor, corroboradas por una serie de elementos contra los que el Estado parte no ha presentado ninguna prueba, el Comité concluye que el Estado parte incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14 de la Convención.

8. El Comité, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención, estima que los hechos que se le han sometido revelan una violación por el Estado parte del artículo 1, del artículo 2, párrafo 1, leído conjuntamente con el artículo 1; del artículo 11; del artículo 12; del artículo 13; del artículo 14, y del artículo 16 de la Convención.

9. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 118 de su reglamento, el Comité invita encarecidamente al Estado parte a que: a) inicie una investigación imparcial sobre los hechos del caso, con el fin de hacer comparecer ante los tribunales a las personas que pudieran ser responsables del trato infligido al autor; b) otorgue una reparación apropiada al autor, lo que incluiría medidas de indemnización por los daños patrimoniales y morales causados, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición; c) adopte todas las medidas necesarias para prevenir cualquier amenaza o acto de violencia a los que el autor o su familia pudieran verse expuestos, en particular por haber presentado esta queja; d) informe, en un plazo de 90 días a contar desde la fecha de transmisión de la presente decisión, de las medidas que haya adoptado conforme a lo expresado anteriormente, incluida la concesión de una indemnización al autor y las medidas tomadas para evitar toda represalia contra él y su familia.

<sup>27</sup> Comunicación núm. 376/2009, *Bendib c. Argelia*, decisión adoptada el 8 de noviembre de 2013, párr. 6.6; y *Ntikarahera c. Burundi*, párr. 6.4.

<sup>28</sup> Véase observación general núm. 3, párr. 2.

<sup>29</sup> *Ali Ben Salem c. Túnez*, párr. 16.8.